



“Colombia y sus Soldados”

Análisis de las Relaciones Cívico Militares en la Colombia de los 60’S”

Autor

DIEGO ANDRES ROBAYO OLAYA

**Trabajo presentado como requisito para optar por el
título de Magister en Estudios Sociales**

Director, Tutor

Ph.D en Sociología: CARLOS ANDRÉS CHARRY JOYA

Director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales

Escuela de Ciencias Humanas

Maestría en Estudios Sociales

Universidad del Rosario

Bogotá – Colombia

2025

Tabla de contenido

<i>Resumen</i>	4
<i>Abstrac</i>	5
Introducción.....	7
La Estrategia Contrainsurgente Adoptada en Colombia y la Construcción Del Concepto de "Enemigo Interno" Asociado al Comunismo.....	9
Plan Militar de Operaciones Lazo	10
El Plan Militar de Operaciones Lazo, su implementación y su papel en la construcción de un discurso militar alineado con la ideología anticomunista.....	12
Plan de Guerra Perla.	19
El Plan Militar de Operaciones Perla, su implementación y su papel en la construcción de un discurso militar alineado con la ideología anticomunista.....	21
Evaluacion Crítica de Las Relaciones Cívico-Militares s la Luz de la Bibliografía Especializada.....	25
Influencia de la Violencia Política en las RCM	26
Estudio Del Discurso Estatal y Militar Que Vinculaba el Desarrollo Social Con la Lucha Contra el Comunismo	35
El Plan Lazo: Militarización Del Control Social Con Enfoque Anticomunista.....	35
El Plan Perla: Hacia Una Integración Social-Militar Más Amplia	40
Acuerdos y Disensos Entre el Plan Lazo y el Plan Perla	44

Evaluación de las iniciativas dirigidas a alienar a las comunidades del pensamiento comunista y alinearlas con el gobierno..... 46

Impacto en la confianza hacia las instituciones: Análisis de cómo estas estrategias afectaron la percepción de la población sobre las fuerzas armadas y el Estado, incluyendo tensiones y desconfianzas persistentes. 49

Conclusiones..... 52

Referencias 56

“Colombia y Sus Soldados”

Análisis de Las Relaciones Cívico Militares en la Colombia de Los 60`S

Resumen

El artículo: "Colombia y sus soldados: Análisis de las relaciones cívico-militares en la Colombia de los 60's" analiza cómo las relaciones cívico-militares (RCM) en la Colombia de la década de 1960, se configuraron como una estrategia de control social y contrainsurgencia, influenciada por la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense en el contexto de la Guerra Fría. El problema central es comprender cómo estas estrategias, particularmente los Planes Lazo y Perla, buscaron combatir la subversión y legitimar al Estado, definiendo al "enemigo interno" (asociado al comunismo) y posicionando a las Fuerzas Armadas como actores de represión y desarrollo, mientras relegaban a un segundo plano las causas estructurales del conflicto como la desigualdad.

El objetivo general es evaluar el rol de las RCM como herramienta de control y contrainsurgencia. Los objetivos específicos son: 1) Caracterizar la estrategia contrainsurgente colombiana, destacando la influencia externa y la construcción del "enemigo interno". 2) Evaluar críticamente las RCM como mecanismo de alienación ideológica y control social para legitimar al Estado frente al comunismo en zonas rurales.

Metodológicamente, se adopta el enfoque de la historia del tiempo presente de Fazio Vengoa, (2010) para conectar dinámicas nacionales y globales. Los resultados indican que el Plan Lazo fue eminentemente represivo y militarizado, destacando el

discurso de "ganar mentes y corazones", mientras que el Plan Perla integró elementos sociales, pero subordinados a la lógica militar.

En conclusión, las RCM funcionaron como un instrumento clave del poder estatal que subordinó el desarrollo social a fines contrainsurgentes, logrando cierto control territorial, pero perpetuando la desconfianza y la exclusión, evidenciando la necesidad de un enfoque más equilibrado.

Palabras clave: Relaciones Cívico-Militares, Contrainsurgencia, Doctrina de Seguridad Nacional, Plan Lazo, Plan Perla.

Abstract

The article, "Colombia and its Soldiers: Analysis of Civil-Military Relations in Colombia during the 1960s," analyzes how civil-military relations (CMR) in Colombia during the 1960s were shaped as a strategy of social control and counterinsurgency, influenced by the U.S. National Security Doctrine within the context of the Cold War. The central problem is understanding how these strategies, particularly Plans Lazo and Perla, sought to combat subversion and legitimize the State by defining the "internal enemy" (associated with communism) and positioning the Armed Forces as actors of both repression and development, while sidelining the structural causes of the conflict, such as inequality.

The general objective is to evaluate the role of CMR as a tool for control and counterinsurgency. The specific objectives are: 1) To characterize the Colombian counterinsurgency strategy, highlighting external influence and the construction of the

"internal enemy." 2) To critically evaluate CMR as a mechanism of ideological alienation and social control aimed at legitimizing the State against communism in rural areas.

Methodologically, the approach of the history of the present time by Fazio Vengoa (2010) is adopted to connect national and global dynamics. The results indicate that Plan Lazo was eminently repressive and militarized, emphasizing the "winning hearts and minds" discourse, while Plan Perla integrated social elements, albeit subordinated to military logic.

In conclusion, CMR functioned as a key instrument of state power that subordinated social development to counterinsurgency objectives, achieving some territorial control but perpetuating mistrust and exclusion, thereby highlighting the need for a more balanced approach.

Keywords: Civil-Military Relations, Counterinsurgency, National Security

Doctrine, Plan Lazo, Plan Perla

“Colombia y sus soldados”

Análisis de Las Relaciones Cívico Militares en la Colombia de Los 60's

Las relaciones cívico-militares en Colombia durante la década de 1960 ocuparon un lugar central en la configuración del aparato estatal, especialmente en un contexto marcado por la violencia política interna y la influencia de la Guerra Fría. Este periodo estuvo caracterizado por la implementación de estrategias que buscaban asegurar el control territorial y la cohesión social frente a la amenaza percibida de subversión comunista, a través de políticas que fusionaban desarrollo social y acciones militares. Este trabajo propone un análisis hermenéutico de estas relaciones, tomando como eje central los Planes Lazo (1962-1964) y Perla (1968), dos iniciativas contrainsurgentes que ofrecieron respuestas diferenciadas, pero complementarias, frente al bandolerismo, las emergentes guerrillas y el auge de la ideología comunista.

El marco teórico y metodológico de esta investigación se basa en la construcción de significados históricos a partir de la interacción entre actores cívicos y militares, reconociendo que estas dinámicas no solo respondieron a factores nacionales, sino también a la presión geopolítica de Estados Unidos, potencia que impulsó la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina. Para ello, se analiza el discurso estatal y militar que vinculaba el desarrollo social con la lucha contra el comunismo, al tiempo que se evalúa las acciones cívico-militares como mecanismos de control social orientados a alienar a las comunidades rurales del pensamiento comunista con las instituciones gubernamentales.

La importancia del análisis radica en su capacidad para resaltar las tensiones entre el desarrollo social y la militarización, aspectos que impactaron la percepción de la población sobre el Estado y las fuerzas armadas. Desde una perspectiva hermenéutica, se exploran las estrategias utilizadas para construir un “enemigo interno” y fortalecer el control estatal mediante una narrativa que presentaba al Estado como el garante del progreso y la estabilidad, en contraposición a la amenaza subversiva. Este estudio también se adentra en los acuerdos y contradicciones entre los Planes Lazo y Perla, que, aunque compartieron un discurso anticomunista, ilustran enfoques diferenciados respecto a la integración del desarrollo social y la acción militar.

A partir de esta revisión, se invita a reflexionar sobre el impacto de estas estrategias en el tejido social y político de Colombia, destacando cómo las relaciones cívico-militares se erigieron en un instrumento de control social y político que dejó un legado ambivalente en la configuración del Estado y su relación con la ciudadanía.

La Estrategia Contrainsurgente Adoptada en Colombia y la Construcción del Concepto de "Enemigo Interno" Asociado al Comunismo.

Fazio (2010), argumenta que la historia del tiempo presente no debe limitarse a la reconstrucción de eventos recientes, sino que los acontecimientos deben situarse en una relación dialéctica con las coyunturas y los procesos de larga duración. Según este enfoque, un hecho puntual puede catalizar procesos históricos más amplios o reflejar transformaciones estructurales.

Este planteamiento encuentra eco en el análisis de los planes militares desarrollados especialmente en el Plan Lazo y el Plan Perla, planes, que, aunque diseñados como respuestas tácticas frente al conflicto interno, no pueden comprenderse plenamente sin encuadrarlos en el contexto de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional. De este modo, el uso de la militarización del desarrollo social en Colombia se conecta con dinámicas globales que exceden los marcos temporales locales.

El Plan Lazo, implementado entre 1962 y 1964, fue una respuesta directa a la creciente amenaza de subversión armada y violencia sectaria bipartidista. Por otro lado, el Plan Perla, desarrollado durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1968, se centró en fortalecer las capacidades operativas del ejército para combatir eficazmente a grupos insurgentes y bandas criminales. A lo largo de este apartado se examinará cómo estos planes reflejan un discurso militar que buscaba legitimar la intervención en la sociedad no solo como una necesidad estratégica sino también como un medio para ganar "corazones y mentes" en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales. Se

analizará cómo estas estrategias influyeron en la percepción pública del papel militar en Colombia y se discutirá su impacto duradero en el desarrollo social y político del país.

Plan Militar de Operaciones Lazo

El Plan Lazo fue un documento militar estratégico en Colombia, diseñado para enfrentar la violencia y el conflicto armado que surgieron tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. El Plan Lazo buscaba realizar acciones civiles y operaciones militares necesarias para eliminar las cuadrillas de bandoleros y prevenir la formación de nuevos focos de antisociales, buscando así obtener y mantener un estado de paz y tranquilidad en todo el territorio nacional (Comisión de la Verdad, s.f.). Se consideró como un plan pionero en la planificación estratégica de la guerra en Colombia a corto, mediano y largo plazo.

De igual manera, el Plan Lazo fue una estrategia implementada por el Ejército Nacional de Colombia entre 1962 y 1964, en respuesta a la creciente amenaza de subversión armada y la violencia sectaria bipartidista que afectaba al país. Este plan surgió en el contexto de la Guerra Fría y fue influenciado por la política de contrainsurgencia promovida por Estados Unidos, en particular a través de la Alianza para el Progreso (Marín y Figueroa, 2024).

En cuanto a sus acciones específicas, el Plan Lazo incorporó las llamadas acciones cívico-militares, que tenían como propósito acercar a las fuerzas militares a la población civil mediante actividades que mejoraran las condiciones de vida de las comunidades (González, 2015). Estas acciones incluían medidas de acción civil

destinadas a ganar estabilidad política y progreso económico y social, reduciendo así las condiciones que propiciaban la violencia (Ejército Nacional, 1962).

El objetivo principal del Plan Lazo era pacificar el país mediante la implementación de acciones cívico-militares (ACM), que buscaban acercar a las Fuerzas Armadas a la población civil, especialmente en áreas rurales afectadas por el conflicto. Estas acciones incluían jornadas médicas, reparaciones viales, construcción de escuelas y programas de alfabetización, con el fin de ganar el apoyo de la población y aislar a los insurgentes (Ministerio de Defensa Nacional, 1968).

También contemplaba la creación de contingentes especiales de pacificación y el fortalecimiento de las capacidades militares a través de la asistencia técnica y material proporcionada por Estados Unidos. Esto incluyó la formación intensiva del personal militar colombiano en tácticas contrainsurgentes y el incremento del pie de fuerza (Rueda, 2000; Castro, 2016). También reflejó una estrategia más amplia de cooperación cívico-militar en Colombia, donde las Fuerzas Militares asumieron un papel no solo en términos de seguridad sino en el desarrollo social del país. Esto se debió en parte a las lecciones aprendidas por el Batallón Colombia durante su participación en la Guerra de Corea, que influyó significativamente en la doctrina militar colombiana (Fuerzas Militares, 2017).

Las ACM se diseñaron para "ganar el corazón y la mente" de los pobladores, alineándose con los programas desarrollistas promovidos por las administraciones

Kennedy y Johnson. Además, se estableció un Comité Nacional de Acción Cívica Militar para coordinar estas actividades, reforzando así la presencia estatal en zonas conflictivas.

Palacios (2003), menciona tres factores clave del contexto político-social que llevó a la implementación de estas estrategias, la violencia política que era una constante en Colombia, el cual creó un entorno propicio para el surgimiento de movimientos insurgentes que buscaban desafiar el orden establecido; por otro lado, el bandolerismo se convirtió en un problema significativo, especialmente en las zonas rurales, donde bandas armadas operaban con relativa impunidad, afectando la seguridad y estabilidad regional, lo cual llevó al gobierno a buscar estrategias para combatir estas amenazas internas.

Finalmente menciona la presión internacional manifestada en la Guerra Fría, que también jugó un papel en la configuración de las políticas de seguridad en Colombia dada la influencia de Estados Unidos, que preocupado por la expansión del comunismo en América Latina, incentivó al gobierno colombiano a adoptar medidas más agresivas contra los grupos subversivos (Palacios, 2003).

El Plan Militar de Operaciones Lazo, su Implementación y su Papel en la Construcción de un Discurso Militar Alineado con la Ideología Anticomunista.

Como lo hemos señalado, el Plan de Operaciones Lazo de 1962, fue una iniciativa dirigida a confrontar las dinámicas de violencia que azotaban el país, especialmente las asociadas con las guerrillas y cuadrillas de bandoleros. Su implementación estuvo profundamente influenciada por la doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, marcando un punto de inflexión en la narrativa

militar colombiana frente al comunismo y a la construcción del concepto de "enemigo interno". A continuación, se evalúan las principales características del plan, su implementación y su papel en el establecimiento de un discurso militar alineado con la ideología anticomunista.

El Plan de Operaciones Lazo, formulado por el Ejército Nacional de Colombia, representa un esfuerzo por afrontar la complejidad del conflicto interno colombiano desde una perspectiva predominantemente militar. Su diseño y ejecución estuvieron profundamente influenciados por la coyuntura histórica de la Guerra Fría, con un enfoque claro en la lucha contra el comunismo como eje central de su discurso y estrategia. Este plan merece un análisis detallado, tanto de su implementación como de su impacto en la configuración de un discurso político y militar alineado con la ideología anticomunista promovida en las Américas durante la segunda mitad del siglo XX.

Fortaleciendo la idea y contexto a nivel tanto ideológico como político anticomunista en Colombia, Según Lair (2000):

Obsesionados por la expansión del comunismo y la manipulación de los colombianos por parte de la Unión Soviética (visión del Departamento de Estado), Estados Unidos entró en tensión con el gobierno colombiano poco antes de la muerte de Gaitán, todo con el telón de fondo de la evidente preocupación por la seguridad hemisférica. (p.127).

En primer lugar, el Plan Lazo se presenta como una respuesta del Estado Colombiano al fenómeno del bandolerismo, las guerrillas y la agitación socio-sindical en

el contexto de una creciente influencia de movimientos revolucionarios en América Latina. Su objetivo principal era eliminar las cuadrillas de bandoleros, evitar la formación de nuevos focos de violencia y restablecer la paz en el territorio nacional (Ejército Nacional, 1962). Aunque estas metas eran legítimas desde el punto de vista del mantenimiento del orden público, el plan articulaba estas acciones bajo un marco narrativo en el que el comunismo era identificado como la mayor amenaza para la estabilidad del país, configurando así un discurso anticomunista que buscaba justificar la militarización del conflicto interno.

Una característica fundamental del Plan Lazo fue su marcado enfoque militarista, estructurado en cinco fases estratégicas: acciones preparatorias, inicio de la ejecución, operaciones ofensivas, destrucción de cuadrillas y reconstrucción (Ejército Nacional, 1962). La progresión de estas fases demuestra un énfasis en el despliegue de la fuerza como principal herramienta para neutralizar las amenazas insurgentes, lo cual está alineado con las doctrinas de contrainsurgencia promovidas por Estados Unidos en el marco de la Alianza para el Progreso. A través de alianzas estratégicas, entrenamiento militar y asesoría externa, el gobierno colombiano adoptó un enfoque que priorizaba la acción armada sobre soluciones sociales o políticas. Este énfasis en la represión militar tuvo implicaciones importantes, ya que, aunque buscaba restablecer la paz, terminó exacerbando la violencia en las regiones afectadas al priorizar las operaciones ofensivas por encima de las intervenciones estructurales que atacaran las raíces del conflicto, como la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Tal y como se puede ver a partir de los estudios realizados por Pecaut (2012), haciendo referencia a la cuestión social, al señalar que “...un

régimen como este no tiene otra política en este campo que el empleo de la policía, del ejército y de la violencia en todas sus formas” (p.101).

Por su lado, Palacios (2003), en su obra *“Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994”* señalaba que:

Las Fuerzas Armadas se Involucraron en el conflicto civil y las doctrinas de la Guerra Fría infundieron en la oficialidad la mentalidad del “enemigo interno”, que a la postre resultaría nefasta para la institucionalización democrática [...] la policía uno de los pilares de cualquier Estado moderno, comprometida en muchos crímenes, gana entre la población civil una reputación de brutalidad e ineficacia. (p.234)

Por su parte, Gonzales (2014) en *“Poder y Violencia en Colombia”*, indicaba que: “el impulso al reformismo por conducto de la Alianza para el Progreso y la profundización de la mentalidad contrainsurgente en el seno de las Fuerzas Armadas” (p.394).

Finalmente, la recopilación de ensayos hecha por Sánchez y Peñaranda (1991) titulada *“Pasado y Presente de la Violencia en Colombia”* cita a Gilhodés, (s.f) donde se afirmaba lo siguiente:

En este sentido, se puede afirmar que el Ejército combate la violencia sin analizarla mucho, sin interrogarse mucho sobre sus causas, sus implicaciones

reales. Actúa como un mecanismo de defensa de la sociedad o también de defensa o de reivindicación de sus muertos. (*pp. 199; 351*).

Por otro lado, el plan promovió la participación de civiles mediante la creación de unidades de autodefensa, las cuales serían organizadas, adoctrinadas y, eventualmente, armadas por las fuerzas militares. Aunque en teoría estas unidades estaban diseñadas para proteger sus comunidades, en la práctica su implementación resultó problemática. La militarización de la población civil no solo comprometió el principio de distinción entre combatientes y no combatientes establecido por el Derecho Internacional Humanitario, sino que también sentó las bases para la posterior consolidación de grupos paramilitares en Colombia. La entrega de armas a civiles, incluso bajo la justificación de garantizar la seguridad, abrió la puerta a dinámicas de violencia descentralizada y fuera del control estatal, lo cual agravó las tensiones en muchas regiones.

Además, el Plan Lazo incluyó acciones psicológicas y de control social como elementos clave para garantizar el éxito de las operaciones. Este aspecto del plan refleja la influencia de las estrategias de guerra psicológica desarrolladas en el contexto de la Guerra Fría, donde el control de la narrativa y la percepción pública era tan importante como los logros militares.

De hecho, según el documento del Ejército Nacional (1962) “*Operaciones Sicologicas*” en su anexo J menciona que “es importante que los civiles sean adoctrinados cuidadosamente” (p.195). Así mismo, menciona que en su Misión se buscaba fomentar el apoyo al gobierno, al señalar lo siguiente:

Hacer llegar a la población civil el conocimiento de los beneficios del sistema de gobierno democrático y al mismo tiempo repudiar los hechos violentos engendrados por los cabecillas políticos irresponsables que quieren imponer su ideología por medio de la persecución y el terror. (p.196)

Con lo cual se buscaba generar un desafecto hacia los bandoleros mediante campañas de influencia, tal y como se puede establecer por lo dicho en el siguiente fragmento:

Desprestigio sistemático del bandolero con la utilización de todos los medios posibles de propaganda: hojas de volantes, prensa hablada y escrita, altoparlantes disponibles en los municipios, equipos móviles propios de acción psicológica aprovechando en los municipios los días de mercado y reunión. (Ejército Nacional, 1962, p. 196).

Por lo cual, se plantean interrogantes sobre el respeto a las libertades fundamentales, como la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Este adoctrinamiento se articulaba con medidas restrictivas para controlar a las comunidades, lo que podía derivar en prácticas autoritarias que afectaran la vida cotidiana de las poblaciones más vulnerables.

Desde una perspectiva contemporánea alineada con los derechos humanos, el Plan Lazo presenta varios aspectos cuestionables, aunque incluía una fase de reconstrucción que buscaba abordar las causas estructurales del conflicto, esta se relegó al final del proceso, dejando claro que las prioridades inmediatas eran de carácter militar. Esto refleja una visión reduccionista del problema de la violencia en Colombia, en la cual los

conflictos estructurales, como la pobreza, el analfabetismo y la desigualdad, se trataron como cuestiones secundarias. Al no priorizar estas intervenciones sociales y económicas, el plan perpetuó la sensación de exclusión que había alimentado originalmente las dinámicas de insurrección y bandolerismo en las zonas rurales.

Un elemento particularmente significativo del Plan Lazo, fue su papel en la construcción de un discurso militar anticomunista que justificaba las acciones del Ejército bajo la amenaza percibida del comunismo internacional. Esto queda claro en la forma en que el documento señalaba al comunismo como el promotor de agitación sindical y subversión en las zonas rurales, vinculándolo directamente con las cuadrillas de bandoleros, tal y como puede establecerse en diferentes apartados del documento, como el siguiente:

Agitación Socio-Sindical: He aquí seguramente la parte más grave de nuestro problema. [...]. Es muy posible que el movimiento sindical, en caso de que el Gobierno no tome medidas, al entrar de lleno al periodo o etapa de revolución haga uso de las Cuadrillas de Bandoleros, aun cuando tal procedimiento le reste altitud al movimiento. (Ejército Nacional, 1962, p.13)

Este discurso no solo sirvió para homologar diversas formas de protesta social con actividades insurgentes, sino que también contribuyó a legitimar la represión de movimientos sociales y sindicales bajo la etiqueta de "subversión comunista". En este contexto, el Plan Lazo se alineó con las narrativas de seguridad hemisférica promovidas

por Estados Unidos, que en muchos casos priorizaban los intereses geopolíticos sobre las necesidades locales de desarrollo y justicia social. (Sánchez, 2000; Pécaut, 2012)

Para Douglas Osher Sofer citado por Eastman, et al. (2001), “los objetivos estadounidenses entraron en contradicción, y sacrificaron la posibilidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población a la luz de sus intereses estratégicos.” (p. 164)

Plan de Guerra Perla

El Plan de Guerra Perla, implementado durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1968, fue una estrategia clave en Colombia que buscaba integrar las capacidades militares con el desarrollo social y económico en regiones afectadas por el conflicto (Bonilla y Villada, 2020). Este plan tenía como objetivo principal que las brigadas del Ejército informaran sobre urgencias no militares en sus jurisdicciones, permitiendo así una intervención estatal más efectiva. Las acciones específicas incluían la identificación de necesidades en infraestructura vial, educación, salud, titulación de tierras y ordenamiento territorial. Respecto a la infraestructura vial, se buscaba mejorar la conectividad y el acceso a regiones aisladas, facilitando el transporte de bienes y personas; en el ámbito educativo, se pretendía identificar la falta de escuelas y recursos educativos para promover la alfabetización y el acceso a la educación básica; en salud, el enfoque estaba en detectar la ausencia de centros médicos y servicios sanitarios básicos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

La titulación de tierras era crucial para garantizar la seguridad jurídica de los campesinos sobre sus propiedades, lo cual contribuiría a reducir conflictos territoriales y fomentar la inversión agrícola. Finalmente, el ordenamiento territorial se centraba en planificar el uso del suelo para optimizar el desarrollo urbano y rural, asegurando un crecimiento sostenible y equitativo (Bonilla y Villada, 2020). El propósito del Plan Perla era que las FF.AA. apoyaran el desarrollo regional mediante la provisión de información crucial para la intervención estatal, contribuyendo así al impulso del desarrollo social y económico en áreas afectadas por el conflicto (Bonilla y Villada, 2020).

Según Palacios (2003), el Plan Perla también se centró en fortalecer las capacidades operativas de las FF.AA. para combatir eficazmente a los grupos insurgentes y bandas criminales. Esto incluyó la modernización del equipamiento militar y el desarrollo de tácticas contrainsurgentes adaptadas a las condiciones geográficas y sociales del país.

Además de los aspectos militares, el Plan Perla buscó abordar las causas subyacentes de la violencia mediante programas de desarrollo social. Estos programas estaban orientados a mejorar las condiciones de vida en las áreas afectadas por el conflicto, promoviendo la educación, la salud y el desarrollo económico para reducir el apoyo local a los grupos subversivos (Palacios, 2003).

El plan tuvo un impacto mixto. Mientras logró ciertos avances en términos de seguridad, también enfrentó críticas por su enfoque militarista y por no abordar completamente las raíces sociales del conflicto. La implementación de programas sociales fue desigual, lo que limitó su efectividad en algunas regiones (Palacios, 2003). En

resumen, puede decirse que la implementación del Plan Perla reflejaba un enfoque integral del conflicto, donde se buscaba no solo una respuesta militar, sino también una intervención social coordinada que atendiera las necesidades básicas de las comunidades.

El Plan Militar de Operaciones Perla, su Implementación y su Papel en la Construcción de un Discurso Militar Alineado con la Ideología Anticomunista.

El Plan Perla 1968, diseñado por las Fuerzas Militares de Colombia, refleja un enfoque estratégico y operativo específico para enfrentar la amenaza subversiva, particularmente vinculada al comunismo y las guerrillas revolucionarias como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este plan, emitido en un contexto caracterizado por la Guerra Fría y la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, desempeñó un papel central en la construcción de un discurso militar profundamente alineado con la ideología anticomunista. A continuación, se evalúan detalladamente su implementación y su papel en dicha construcción.

El Plan Perla surge como una respuesta integral a un conjunto de procesos de violencia prolongada en Colombia. Según el Ministerio de Defensa Nacional (1968), las Fuerzas Armadas colombianas identificaron que las intervenciones netamente militares eran insuficientes para derrotar la subversión mientras esta se sustentase en causas estructurales, como la desigualdad socioeconómica y los vacíos del Estado en áreas rurales. A partir de esta premisa, el plan integra tanto operaciones militares como estrategias de desarrollo social con el objetivo de combatir las causas primarias de la rebelión y socavar la influencia comunista, como se deduce a partir de las siguientes afirmaciones: “La consecución de los objetivos estratégicos enunciados, supone la plena integración de

esfuerzos civiles y militares, dentro del criterio de combatir la subversión y sus causas primarias.” (Ministerio de Defensa Nacional, 1968, p. 6)

Una de las características más destacadas del Plan Perla es su articulación en fases, que permiten una implementación gradual y adaptativa, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos en el terreno. La primera fase se centra en la destrucción del ELN y la consolidación del orden en áreas afectadas, mediante la acción de brigadas específicas y un esfuerzo combinado de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La segunda fase, por su parte, se orienta hacia la contención y el debilitamiento de la potencialidad guerrillera, priorizando las zonas de la Cordillera Oriental (región entre Huila y Caquetá), mediante redes de inteligencia, actividades psicológicas y acción cívico-militar. En este sentido, las estrategias del plan no se limitan a la confrontación militar directa, sino que buscan aislar a las guerrillas de sus bases de apoyo campesinas, promoviendo la confianza y el respaldo de las comunidades hacia el gobierno.

El Plan Perla se inscribe en el marco ideológico de la Guerra Fría, situando al comunismo como el "enemigo interno" y vinculando la subversión nacional con influencias internacionales, especialmente de Cuba. Este discurso anticomunista tiene como propósito legitimar la intervención militar en áreas rurales y fortalecer la narrativa de que la acción de las guerrillas es una amenaza no solo para la seguridad interna, sino también para la estabilidad regional y los valores democráticos.

Asimismo, el énfasis en la coordinación de esfuerzos entre el gobierno y las fuerzas armadas refleja la apropiación de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, que

promovía la colaboración cívico-militar como una estrategia clave para la contrainsurgencia, “la gestión internacional del Gobierno colombiano se basa en un carácter de universalidad de gran amplitud frente a los conflictos existentes o a los que pudiesen surgir”. (Ministerio de Defensa Nacional, 1968, p. 3).

Declaración a lo cual se agrega que:

Las Fuerzas Armadas de Colombia mantienen la soberanía y la integridad institucional del Estado frente a la subversión [...] y dirigiendo el esfuerzo principal a combatir la acción revolucionaria del partido comunista, con sus posibilidades de apoyo externo, en particular el que se efectúa desde o a través de Cuba, con el propósito de afianzar la paz interna y contribuir a la seguridad del Continente Americano. (Ministerio de Defensa Nacional, 1968, p. 5)

Un aspecto central en el Plan Perla es el uso de la acción cívico-militar como una herramienta de control social y deslegitimación de las guerrillas en las zonas de influencia; mediante actividades como la construcción de infraestructura, la organización de redes de seguridad comunitaria y la implementación de programas educativos y de salud, se buscaba ganar "los corazones y las mentes" de las comunidades rurales, reduciendo su adhesión a las ideologías revolucionarias. Este enfoque, aunque presentado como una iniciativa de asistencia social, tenía implicaciones políticas claras: fortalecer la presencia del Estado en territorios históricamente abandonados y contrarrestar la narrativa de las guerrillas que presentaban la violencia como el único camino viable hacia el desarrollo.

No obstante, el plan también presenta limitaciones y contradicciones que afectaron su implementación. Por una parte, las fuerzas militares enfrentaron restricciones presupuestarias que limitaban la ampliación de los medios bélicos y operativos. Además, el uso de tácticas irregulares y la construcción de redes de inteligencia en áreas rurales, aunque efectivas para infiltrar y desarticular a las guerrillas, contribuyeron en algunos casos a la militarización excesiva de estas regiones y a tensiones con las comunidades locales. Por otra parte, el énfasis en la figura del "enemigo interno" y en la lucha contrainsurgente reforzó discursos polarizantes que caracterizaban cualquier disidencia ideológica como una amenaza a la seguridad del Estado, lo que abrió la puerta a violaciones de derechos humanos y abusos de poder.

El enfoque estratégico del Plan Perla, que incluía la neutralización del aparato comunista y la consolidación del orden en áreas rurales, resalta la importancia de la integración de esfuerzos civiles y militares en la lucha contra la subversión violenta. En este sentido, el plan contribuyó a institucionalizar la ideología anticomunista como un eje rector de las políticas de seguridad en Colombia, alineándolas con el paradigma geopolítico de la Guerra Fría. Sin embargo, esta misma alineación también configuró un modelo de intervención estatal que priorizó la seguridad por encima de soluciones estructurales a las problemáticas sociales subyacentes.

En conclusión, el Plan Perla 1968 representó un esfuerzo significativo de las Fuerzas Militares de Colombia por responder a la amenaza subversiva desde una perspectiva integral, combinando operaciones militares con estrategias de desarrollo social. Si bien su implementación permitió ciertos avances en la lucha contrainsurgente, también

consolidó un discurso militar y gubernamental fuertemente ideologizado, que marcó la política de seguridad colombiana en las décadas posteriores.

Evaluación Crítica de Las Relaciones Cívico-Militares la Luz de la Bibliografía

Especializada

Fazio (2010), aborda cómo el presente inmediato conlleva disputas en torno a la construcción de significados históricos, especialmente en contextos donde los Estados buscan legitimar sus acciones mediante narrativas estratégicas. En el presente artículo esta perspectiva se evidencia claramente en el análisis de los discursos estatales y militares que vinculaban el desarrollo social con la lucha contra el comunismo, ya que tanto el Plan Lazo como el Plan Perla construyeron narrativas que demonizaban al "enemigo interno", en el Plan Lazo se menciona explícitamente la categoría de "Fuerzas enemigas", si bien no se detalla su composición inicialmente, más adelante según su "Anexo A" de Inteligencia que va de la página 10 a la 34, el "enemigo" abarca tanto a los grupos guerrilleros como a la influencia ideológica del comunismo y a los elementos considerados antisociales que perturban el orden, y por su lado el Plan Perla refiere:

Informaciones sobre el enemigo: El Partido Comunista de Colombia y sus diversas tendencias, siguiendo el ideario revolucionario marxista, han venido capitalizando las circunstancias políticas, socioeconómicas y de violencia prolongada que ha padecido el país, para promover y adelantar la subversión en sus diversos aspectos, inclusive el guerrillero. (Ministerio de Defensa Nacional, 1968, p. 2)

Así como, presentaban al Estado como el único garante de progreso y estabilidad, esto resuena con el argumento de Fazio de que las narrativas históricas contemporáneas no solo explican los hechos, sino que buscan intervenir directamente en las percepciones sociales del orden y la legitimidad.

El periodo comprendido entre 1948 y 1970 en Colombia estuvo marcado por una profunda transformación en las relaciones cívico-militares, influenciadas en gran medida por la violencia política que caracterizó esos años. Este capítulo explora cómo eventos cruciales, como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el subsecuente "Bogotazo", catalizaron cambios significativos en la interacción entre las fuerzas armadas, la sociedad civil y el gobierno. En la primera parte de esta evaluación crítica del rol de las relaciones cívico-militares como un mecanismo de control social, se analizarán las tensiones y desconfianzas generadas entre civiles y militares debido a la instrumentalización política del ejército, y, además, se examinará cómo la experiencia internacional del Batallón Colombia en la Guerra de Corea influyó en la modernización y fortalecimiento de las capacidades militares nacionales. Finalmente, se discutirá el impacto de estas relaciones cívico-militares en el desarrollo social y político del país, destacando tanto los logros como los desafíos persistentes en un contexto de conflicto prolongado, para posteriormente estudiar el discurso estatal y militar que vinculaba el desarrollo social con la lucha contra el comunismo, a través de la lectura y análisis de estos documentos secretos de Estado.

Influencia de la Violencia Política en las RCM

Fazio (2010), subraya que la historia del tiempo presente surge como respuesta a demandas sociales inmediatas que exigen interpretar el presente en su relación con el

pasado. En este marco, las acciones cívico-militares fueron una respuesta inmediata a la violencia subversiva, pero sus efectos se prolongaron en el tiempo, moldeando las relaciones cívico-militares durante décadas. La noción de "urgencia" que destaca Fazio es clave para entender la forma en que el Estado colombiano utilizó estrategias como el Plan Perla no solo para resolver conflictos inmediatos, sino también para intentar controlar narrativas y lealtades a largo plazo.

Según Sánchez y Peñaranda (1987), la violencia política en Colombia se ha manifestado de diversas formas, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta los conflictos armados más recientes, sumando etapas que han influido significativamente en la evolución de la doctrina militar y en la forma en que las fuerzas armadas interactúan con la población civil y el gobierno. Durante ciertos periodos, los partidos políticos han utilizado al ejército para consolidar poder o enfrentar oposiciones internas, lo que ha generado tensiones y desconfianza entre civiles y militares. Este uso político del ejército ha influido en su percepción pública y en su rol dentro de la sociedad.

La violencia política en Colombia ha tenido un impacto profundo y duradero en las Relaciones Cívico-Militares (RCM) del país, influenciando tanto la estructura como la dinámica entre las fuerzas armadas y la sociedad civil. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, conocido como "El Bogotazo", se desató una ola de violencia que alteró significativamente el orden social y político, marcando el comienzo de un periodo de inestabilidad que llevó a las Fuerzas Militares a asumir un rol más prominente en el control del orden público y la represión de movimientos subversivos (Comisión de la Verdad, s.f.); tal como se señaló el 4 de noviembre de 1949 citado por Pécaut (2012), "El

pueblo pide al ejército nacional que este a la altura de su deber histórico; que salve al país de su destrucción; que salve la democracia; que devuelva a la república la paz y la justicia.” (p. 529)

Así mismo, según el estudio de Guzmán et al (2019), donde se menciona la percepción de del conflicto en relación al ejército y el pueblo:

Las dimensiones del conflicto exigen la presencia del Ejército. Al principio, a este se le quiere y se le respeta. El pueblo colombiano se enorgullece de él. Pero el cataclismo lo envuelve en sus círculos gigantes y entra en acción por razones de orden público. (p. 166)

Durante el periodo conocido como "La Violencia" (1948-1958), se exacerbó la desconfianza entre civiles y militares, el surgimiento de grupos guerrilleros y paramilitares desafió la autoridad del Estado, obligando a las fuerzas armadas a asumir un papel más prominente en la seguridad interna (Palacios, 2003); según Ugarriza y Pabón (2017), este contexto impulsó a los militares a justificar su intervención en asuntos internos como una necesidad para proteger al Estado de amenazas insurgentes, redefiniendo su relación con las autoridades civiles.

La violencia política también influyó en otras estrategias militares y políticas implementadas por las fuerzas armadas, como fueron los planes Patriota y Consolidación, que combinaban acciones militares con esfuerzos políticos para ganar apoyo social, lo cual refleja una influencia directa en las RCM al intentar equilibrar el control civil con la autonomía militar en un contexto de conflicto prolongado (Ugarriza y Pabón, 2017).

Sánchez y Peñaranda (1987) destacan que la violencia política ha influido significativamente en la evolución de la doctrina militar y en cómo las fuerzas armadas interactúan con la población civil y el gobierno.

Por su parte, Pécaut (2012), señala que la violencia política no solo fue un fenómeno social sino también un período histórico que moldeó profundamente las dinámicas políticas internas, creando tensiones entre la democracia decimonónica y nuevas formas de violencia. Llevando a una mayor participación militar en roles civiles, alterando así las RCM, y colocando la singularidad del caso colombiano que radica en cómo esta violencia moldeó las dinámicas políticas internas, en un ejemplo no deseado pero instructivo para América Latina. Aunque hay consenso sobre el impacto profundo de esta violencia en las RCM, existen diferencias entre los autores respecto a cómo se han gestionado estas relaciones a nivel regional y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

Según Palacios (2003), la violencia política, exacerbó la desconfianza entre civiles y militares, y llevó a una militarización de la política colombiana, un fenómeno que se intensificó con el surgimiento de grupos guerrilleros y paramilitares, que desafiaron la autoridad del Estado y obligaron a las fuerzas armadas a asumir un papel más prominente en la seguridad interna del país. Según Ugarriza y Pabón (2017), la violencia llevó a que los militares asuman roles centrales en la seguridad interna del país, lo que ha redefinido su relación con las autoridades civiles, así mismo, este contexto de conflicto ha impulsado a los militares a justificar su intervención en asuntos internos como una necesidad para proteger al Estado de amenazas insurgentes.

La singularidad del caso colombiano, según Pécaut (2012), radica en cómo la violencia moldeó esas dinámicas políticas internas, creando una tensión entre la democracia decimonónica y las nuevas formas de violencia que surgían. Esto tuvo como consecuencia que las fuerzas militares se vieran cada vez más involucradas en roles tradicionalmente civiles como una respuesta a la incapacidad del sistema político para resolver conflictos internos de manera pacífica.

También sugiere que esta situación llevó a una especie de "colombianización" del proceso político latinoamericano, donde Colombia se convirtió en un ejemplo no deseado de cómo la violencia puede influir en la política, un fenómeno que implicó un doble efecto: por un lado, Colombia se volvió un escenario clave para el análisis sociológico y político; por otro lado, se convirtió en un laboratorio para nuevas estrategias de contención social, incluida la guerra sucia. (Pécaut, 2012)

A su vez, Pécaut (2012), argumenta que la violencia política no solo actúa como un mecanismo para resolver conflictos, sino que se convierte en un período histórico que transforma radicalmente las estructuras sociales y políticas del país, por ello la relación entre lo político y lo militar se ve influenciada por la incapacidad del sistema político de Colombia para manejar los conflictos.

De lo anterior, se deduce que la interacción entre lo político, lo militar y lo social en Colombia ha sido históricamente compleja y multifacética, influenciada por un contexto de violencia y conflicto prolongado. Este entramado de relaciones se ha desarrollado en un ambiente donde las fuerzas militares han jugado un papel central en la configuración del orden social y político del país.

Según Dufort (2013), la participación del Batallón Colombia en la Guerra de Corea (1950-1953) fue un punto de inflexión que trajo lecciones significativas para las Fuerzas Militares colombianas, influyendo en su doctrina y estrategias, especialmente en la implementación de la "Guerra contra insurgente". Durante la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), se implementó una estrategia conocida como "Acción Cívica", que asignó a las Fuerzas Militares un papel activo en la asistencia social a las comunidades más vulnerables, reflejando una interacción significativa entre lo militar y lo social; programa que de forma indirecta sirvió como antecedente a los Planes Lazo y Perla aquí analizados. (Fuerzas Militares, 2017).

La "Acción Cívica" se originó en parte debido a las lecciones aprendidas por el Batallón Colombia durante su participación en Corea, permitiéndole a las Fuerzas Militares modernizarse y adoptar estrategias cívico-militares cruciales para abordar los desafíos internos del país (Dufort, 2013).

González (2015), añade que estas acciones cívico-militares buscaban acercar a las fuerzas militares a la población civil mediante iniciativas que mejoraran las condiciones de vida de las comunidades. Este cambio doctrinal y operativo fue fundamental para establecer una relación más estrecha entre las Fuerzas Militares y la sociedad civil.

Cimadevilla (2020), señala que la finalidad de esta estrategia era recuperar la credibilidad institucional ante la población y mitigar los orígenes de la violencia, en un contexto donde la violencia bipartidista y el conflicto armado habían erosionado la confianza en las instituciones del Estado. Esa "Acción Cívica" le permitió a las Fuerzas

Militares colombianas modernizarse y adoptar estrategias cívico-militares que fueron cruciales para abordar los desafíos internos del país (Dufort, 2013). González (2015), suma que estas acciones cívico-militares buscaban acercar a las fuerzas militares a la población civil mediante iniciativas que mejoraran las condiciones de vida de las comunidades.

Sin embargo, esta relación no ha estado exenta de tensiones, que Mansilla (2016), argumenta afirmando que aunque el intervencionismo militar directo en política ha sido limitado, siempre ha existido cierto recelo entre la sociedad civil y las Fuerzas Militares. Durante el período del Frente Nacional (1958-1974), las fuerzas armadas percibieron una misión más allá de lo estrictamente militar, integrando componentes sociales y culturales en su estrategia. Ugarriza y Pabón (2017), destacan que esta interacción se ha caracterizado por un complejo entramado de relaciones donde los militares han desempeñado un papel central en la configuración del orden social y político del país, a la vez que buscan preservar su legitimidad a través de la construcción de una narrativa histórica que justifica sus acciones durante el conflicto armado.

La interacción entre lo político, lo militar y lo social en Colombia, según Ugarriza y Pabón (2017), se ha desarrollado en un contexto de conflicto armado prolongado que ha influido profundamente en estas esferas, por lo que las relaciones entre estos ámbitos han sido moldeadas por la necesidad de enfrentar amenazas insurgentes, llevando a una militarización de las políticas de seguridad y a una estrecha colaboración entre el Estado y las Fuerzas Armadas.

Desde el punto de vista político, el Estado colombiano ha tenido que integrar a los militares en sus estrategias de gobernabilidad, especialmente en regiones afectadas por el conflicto. Esto ha implicado un balance delicado entre mantener el control civil sobre los militares y permitirles cierta autonomía para operar eficazmente contra grupos insurgentes (Ugarriza y Pabón, 2017).

En el ámbito social, la presencia militar ha sido una constante en muchas comunidades, lo que ha generado dinámicas complejas de interacción con la población civil. Las fuerzas armadas han llevado a cabo acciones cívico-militares como parte de su estrategia para ganar "corazones y mentes", buscando así legitimar su presencia y obtener apoyo local. Sin embargo, esta interacción también ha sido fuente de tensiones, especialmente cuando se han producido violaciones a los derechos humanos. También en el ámbito social, la violencia genera una especie de introversión nacional que aísla a Colombia de los debates latinoamericanos sobre desarrollo social y político, contribuyendo a que el país se convierta en un laboratorio para nuevas estrategias de contención social, donde se prueban métodos de represión que luego podrían aplicarse en otros contextos (Pécaut, 2012; Ugarriza y Pabón, 2017).

La militarización del conflicto ha tenido implicaciones significativas para la sociedad colombiana; ha contribuido a la perpetuación de un estado de violencia crónica que afecta no solo la seguridad física de los ciudadanos, sino también su confianza en las instituciones del Estado. Además, la narrativa histórica promovida por los militares busca justificar su papel como defensores del orden frente a las amenazas internas, lo cual influye en la percepción pública sobre su rol en la sociedad (Ugarriza y Pabón, 2017).

Según Palacios (2003), esta interacción se ha visto influenciada por procesos de modernización económica y social, así como por la violencia política que ha caracterizado al país. En términos de *Interacción Política*, el sistema político colombiano ha estado marcado por la centralización del poder y la influencia de élites tradicionales, lo que ha afectado la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales. A esto se suma la violencia política, especialmente durante el periodo de "La Violencia" y el conflicto armado con guerrillas, que ha exacerbado las tensiones políticas y ha llevado a una militarización de ciertos aspectos de la gobernanza.

En términos de *Interacción Militar*, las fuerzas armadas han jugado un papel crucial en la historia política de Colombia, actuando no solo como defensores del orden público sino también como actores políticos en sí mismos, por lo que la interacción con el ámbito civil se ha caracterizado por periodos de colaboración y tensión, especialmente en contextos de lucha contra insurgencias y narcotráfico. En términos de *Interacción Social*, la sociedad colombiana ha experimentado profundas transformaciones demográficas y económicas que han influido en sus dinámicas políticas y militares. La urbanización acelerada y las migraciones internas han creado nuevas configuraciones sociales que desafían las estructuras tradicionales. Además, las desigualdades persistentes han alimentado conflictos sociales que se entrelazan con la violencia política (Palacios, 2003).

Sánchez y Peñaranda (1987), argumentan que el uso del ejército por partidos políticos para consolidar poder o enfrentar oposiciones internas ha generado tensiones y desconfianza entre civiles y militares. Pécaut (2012), añade que la violencia política no

solo actúa como un mecanismo para resolver conflictos, sino que transforma radicalmente las estructuras sociales y políticas del país.

Estudio Del Discurso Estatal y Militar Que Vinculaba el Desarrollo Social Con la Lucha Contra el Comunismo

El análisis del discurso estatal y militar vinculado al desarrollo social y la lucha contra el comunismo, a través de los planes Lazo (1962) y Perla (1968), revela un enfoque estratégico integral que combinó acciones militares y civiles para enfrentar las amenazas insurgentes en un contexto marcado por la Guerra Fría. Ambos planes, aunque similares en su marco anticomunista, presentan matices y diferencias en sus mecanismos de implementación, prioridades y resultados que reflejan la evolución de la doctrina contrainsurgente y los desafíos del contexto sociopolítico colombiano.

El Plan Lazo: Militarización Del Control Social Con Enfoque Anticomunista

El análisis del Plan Lazo, especialmente desde la perspectiva de Huntington (1957), en *El Soldado y el Estado*, permite entender de manera más profunda las dinámicas de militarización del control social con un enfoque anticomunista en Colombia. Huntington planteó que el control civil efectivo sobre las fuerzas armadas es crucial para mantener el equilibrio entre la seguridad y las libertades democráticas. Sin embargo, en el contexto del Plan Lazo y sus derivados, se puede observar cómo las dinámicas de subordinación institucional al Estado se distorsionaron al militarizar el desarrollo social y

priorizar objetivos de seguridad nacional por encima de los derechos de las comunidades rurales.

El Plan Lazo, desarrollado en 1962 bajo el auspicio del Ejército Nacional y con una fuerte influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sentó las bases para una estrategia contrainsurgente que instrumentalizó el desarrollo social para consolidar el control estatal en las zonas rurales. Este plan partió de la conceptualización del "enemigo interno", que asociaba las cuadrillas de bandoleros y las guerrillas emergentes a la influencia del comunismo internacional.

De acuerdo con los lineamientos del plan, las acciones cívico-militares (ACM) desempeñaron un papel crucial en el intento de "ganar los corazones y mentes" de la población rural. Estas acciones incluyeron la construcción de infraestructuras como caminos y escuelas, programas de alfabetización y jornadas médicas, en un esfuerzo por alienar a las comunidades de las ideas comunistas y presentarlas como dependientes del Estado. Sin embargo, estas acciones, aunque significativas en apariencia, estuvieron subordinadas a los objetivos militares. Tal como lo señala el propio documento del Plan Lazo: "El desarrollo económico y social es un medio indispensable para reducir la influencia subversiva, pero debe estar guiado por los imperativos de seguridad nacional" (Ejército Nacional, 1962, p. 8).

El Plan Lazo, adoptó un enfoque basado en la identificación y eliminación del "enemigo interno". Huntington (1957), explica que los militares, cuando se les otorga autonomía excesiva en la formulación de políticas civiles, tienden a rediseñar la sociedad

en función de sus propios intereses estratégicos, lo que claramente se reflejó en la implementación del plan. Según su ejecución, las acciones cívico-militares (ACM) se desarrollaron como una supuesta estrategia de "ganar corazones y mentes", pero en realidad estaban subordinadas a los fines militares, como la neutralización de insurgentes y el control territorial. La narrativa militar en este contexto promovió un discurso de salvación estatal y progreso social que, bajo análisis crítico, fue más bien una herramienta para legitimar la militarización de la vida cotidiana, tal y como puede constatarse en el documento mismo:

Es fundamental la obtención de colaboración civil para lograr el propósito de las Fuerzas Armadas en la extinción de las cuadrillas de bandoleros [...] Manifestar a la población civil que sin su colaboración no se podría llevar a cabo la labor que ha impuesto el gobierno para liberarlos del pavor y de los efectos de los hechos cometidos por los violentos. (Ejército Nacional, 1962, p. 196)

Además, el plan consolidó un discurso propagandístico que enfatizaba el rol de las fuerzas armadas no solo como garantes de la seguridad, sino también como agentes de desarrollo. Este discurso buscaba justificar la militarización de la vida cotidiana en comunidades rurales, incorporando medidas como la organización de unidades de autodefensa civil. Aunque estas unidades fueron presentadas como un esfuerzo de empoderamiento comunitario, en la práctica sentaron precedentes para la consolidación de

fuerzas paramilitares que profundizaron el conflicto armado, siguiendo lo dicho por el mismo documento:

Los comandantes del área, deben organizar unidades civiles de autodefensa escogiendo para este propósito entre los ciudadanos de la localidad, los miembros que sean dignos de confianza [...] recibirán adoctrinamiento psicológico y entrenamiento militar. (Ejército Nacional, 1962. p 226)

Huntington (1957), señala que el control efectivo de las fuerzas armadas por parte de los civiles requiere no solo subordinación institucional, sino también una clara separación entre las funciones militares y civiles. En el caso del Plan Lazo, se observa que esta separación se difuminó peligrosamente. Las iniciativas de desarrollo, como la construcción de infraestructura y los programas educativos, fueron presentadas como actos de benevolencia militar, cuando en realidad estaban diseñadas estratégicamente para reconfigurar las lealtades de la población y asegurar su alineación ideológica con el gobierno central. Este fenómeno, que Huntington describiría como un "control subjetivo" de las fuerzas armadas (entendido como una inmersión profunda en funciones civiles), resultó en un desbalance que comprometió la autonomía de las instituciones civiles y erosionó la confianza entre militares y comunidades.

Además, la organización de unidades de autodefensa civil bajo el Plan Lazo refleja, según Huntington, un peligroso enfoque instrumentalista de la seguridad pública. El autor advierte que la militarización de la sociedad puede llevar a una percepción de las instituciones armadas como actores de represión más que de protección. Esto concuerda

con el legado del Plan Lazo, donde dichas unidades, lejos de fortalecer la seguridad comunitaria, sentaron las bases para la creación de fuerzas paramilitares que profundizaron el conflicto armado y generaron desconfianza entre la población y las instituciones del Estado.

En el discurso propagandístico adoptado como parte del plan, también resuena la advertencia de Huntington (1957), sobre el riesgo de utilizar ideologías polarizantes para justificar la militarización. La narrativa oficial del Plan Lazo identificó a las guerrillas y a los sectores vulnerables de la población como opositores del progreso, vinculándolos indiscriminadamente con el comunismo internacional. Este marco discursivo no solo erosionó las relaciones entre el ejército y las comunidades rurales, sino que también contribuyó a la deshumanización de los civiles, alineando a las fuerzas armadas con una ideología excluyente y represiva en lugar de un proyecto integrador y democrático. Tal y como declaraba textualmente:

Entre los principales factores que han influido en la violencia podemos citar: a. Indiosincracia [...], b. Bajo nivel de vida [...], c. Bajo nivel cultural, además de esto, la falta de cultura política [...], c. Desocupacion,[...] e. Crisis de Autoridad,[...] f. Crisis Moral [...], g. Comunismo [...]. (Ejército Nacional, 1962, p. 10-12).

El castigo a los civiles, cuando infrinjan alguna disposición, debe aplicarse con verdadera discreción, los castigos injustos pierden el propósito. Debe tenerse mucho cuidado para castigar al verdadero delincuente, ya que con frecuencia se

cometen actos subversivos para provocar represalias injustas contra individuos o comunidades que cooperan con las propias tropas. (Ejército Nacional, 1962, p.214).

En conclusión, el caso del Plan Lazo ejemplifica los riesgos destacados por Huntington (1957), sobre el control militar en sociedades democráticas. La militarización del desarrollo social bajo un discurso anticomunista no solo fracasó en abordar las causas estructurales del conflicto, sino que también profundizó la desconfianza de la población hacia las fuerzas armadas y el Estado en su conjunto.

El Plan Perla: Hacia Una Integración Social-Militar Más Amplia

Samuel Huntington, en su obra *El Soldado y el Estado*, argumenta que la profesionalización del ejército es fundamental para preservar el equilibrio entre la seguridad nacional y la autonomía de las instituciones democráticas. Según Huntington, cuando las fuerzas armadas asumen roles que van más allá de su misión natural de defensa, como tareas de desarrollo civil, emergen riesgos significativos para la eficacia militar y la estabilidad democrática. En este contexto, el Plan Perla se convierte en un ejemplo paradigmático de las tensiones que surgen de dicha integración forzada.

El Plan Perla (1968), desarrollado durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, ejemplifica una estrategia estatal contrainsurgente que buscó una integración superficial de objetivos militares y sociales para abordar las causas estructurales del conflicto en Colombia, como la pobreza rural y la ausencia de infraestructura básica. Sin embargo,

desde la perspectiva de Huntington (1957), esta estrategia puede ser evaluada bajo el marco de la profesionalización militar y las tensiones inherentes al involucramiento de las fuerzas armadas en tareas civiles.

A diferencia del Plan Lazo, el Plan Perla buscó combinar de manera más explícita las acciones militares con una agenda de desarrollo social, identificando "las causas estructurales de la subversión" como la pobreza y la ausencia estatal en las áreas rurales, aunque esto no eximió al plan de priorizar los objetivos militares, pues desde su perspectiva:

Las Fuerzas Armadas han llevado hasta el momento el peso casi total de la lucha [...] sin embargo, resulta evidente que las operaciones militares por si solas no conseguirán la derrota de la subversión, mientras esta se enfatice sobre un vasto complejo de causas profundas que requieren soluciones integrales. (Ministerio de Defensa Nacional, 1968, p. 1).

El Plan Perla profundizó las acciones de ACM, enfatizando en áreas como la titulación de tierras, la mejora de infraestructuras viales y el acceso a servicios básicos como educación y salud. No obstante, estas iniciativas estuvieron integradas a un discurso estatal que vinculaba directamente el desarrollo social con la derrota del comunismo. Este discurso presentó al Estado como el único actor legítimo capaz de proporcionar estabilidad y progreso, mientras demonizaba cualquier propuesta alternativa, especialmente las promovidas por el movimiento guerrillero de las FARC y el ELN, como una amenaza al orden nacional.

Aunque el Plan Perla promovió acciones cívico-militares como la titulación de tierras, la provisión de servicios básicos y el mejoramiento de infraestructura, justificándolas como necesarias para combatir la influencia del comunismo internacional, no obstante, estas intervenciones estuvieron subordinadas a los objetivos militares, lo que contravino la idea de "control objetivo" de las fuerzas armadas planteada por Huntington (1957), este control objetivo exige que los militares se limiten a sus funciones estrictamente defensivas, dejando las tareas de carácter social y político en manos de las instituciones civiles. (Ministerio de Defensa Nacional, 1968)

En el caso del Plan Perla, esta subordinación de los objetivos sociales a la lucha contrainsurgente comprometió la efectividad del desarrollo y exacerbó la percepción de las comunidades rurales de que el Estado priorizaba el control militar sobre su bienestar, de allí lo siguiente:

El propósito del Gobierno en este frente se basa en el fortalecimiento de la unidad nacional y canalización de la opinión pública en apoyo a los planes de seguridad, desarrollo económico y cambio social, tendientes a incrementar el bienestar material, intelectual y moral del pueblo colombiano, dentro de un acendrado espíritu de justicia social, como parte esencial de la lucha contrasubversiva. (Ministerio de Defensa Nacional, 1968, p.3)

Otro aspecto destacado del Plan Perla fue su énfasis en las operaciones psicológicas, diseñadas para desacreditar las narrativas subversivas y fomentar la confianza en el gobierno. Estas acciones incluyeron campañas de propaganda que insistían

en que el progreso social dependía exclusivamente del apoyo a las instituciones estatales, llevando el discurso anticomunista más allá de los ámbitos militares para enraizarlo en las comunidades rurales, pues desde su perspectiva:

Las Fuerzas Militares conducen operaciones psicológicas en apoyo de la acción contra subversiva nacional, buscando el respaldo decidido de la población, [...], el aislamiento de los grupos subversivos por sustracción de solidaridad popular, y la desintegración de sus organizaciones hasta consolidar la paz política en forma total. (Ministerio de Defensa Nacional, 1968, p. 139)

Al respecto y continuando con Huntington (1957), un ejército profesional debe mantenerse al margen de las ideologías políticas, preservando su neutralidad como institución del Estado. Sin embargo, el Plan Perla vinculó explícitamente el desarrollo social con la derrota del comunismo, lo que politizó el rol de las fuerzas armadas al alinearlas como actores ideológicamente comprometidos. Esta politización no solo vulneró el principio de neutralidad, sino que también alentó una demonización de las poblaciones rurales consideradas sospechosas de colaborar con las guerrillas, perpetuando tensiones entre las comunidades y el Estado.

Otro aspecto que Huntington (1957), aborda es el impacto de incorporar agendas civiles a las dinámicas militares sobre la percepción pública de las fuerzas armadas. El Plan Perla, aunque buscó generar confianza mediante acciones de desarrollo, fue percibido por muchas comunidades como una extensión coercitiva del aparato militar, en lugar de un esfuerzo genuino para resolver problemáticas estructurales. Así mismo, este tipo de

percepción erosiona la legitimidad de las fuerzas armadas y puede generar desconfianza hacia las instituciones estatales en su conjunto. En efecto, las campañas de propaganda y las operaciones psicológicas del Plan Perla lograron contrarrestar en algunos casos la influencia guerrillera, pero a costa de profundizar la brecha entre los militares y las comunidades rurales.

Finalmente, Huntington subraya la importancia de una clara separación entre las esferas civil y militar para garantizar la eficiencia de ambos sectores y preservar la democracia. El Plan Perla, al requerir que las fuerzas armadas asumieran responsabilidades civiles, ilustró los desafíos de esta integración. Las limitaciones presupuestarias y la falta de especialización en temas de desarrollo social dificultaron la implementación de medidas sostenibles, dejando a muchas comunidades desatendidas y reforzando la narrativa de abandono estatal.

En conclusión, el Plan Perla, aunque intentó abordar las causas de la subversión mediante un enfoque combinado de desarrollo y seguridad, refleja los peligros señalados por Huntington (1957) sobre la politización del ejército y la expansión de su rol más allá de sus capacidades tradicionales.

Acuerdos y Disensos Entre el Plan Lazo y el Plan Perla

Aunque ambos planes compartieron la misma base ideológica y la estrategia de instrumentalizar el desarrollo social como parte de la contrainsurgencia, presentaron diferencias clave en su enfoque y ejecución.

Tabla 1***Acuerdos y disensos entre el Plan Lazo y el Plan Perla***

Pilares comunes	Diferencias	
	Plan Lazo	Plan Perla
Ambos planes utilizaron las ACM como herramienta fundamental para consolidar el control estatal en las zonas rurales y contrarrestar la influencia guerrillera	Tuvo un carácter más represivo y centrado en las operaciones militares	Adoptó un enfoque más integral, incorporando acciones civiles de mayor alcance
El discurso anticomunista sirvió como eje articulador de las intervenciones, justificando la militarización como una respuesta legítima a las "amenazas internas"	Las limitaciones conceptuales del Plan Lazo derivaron en la simplificación de las causas del conflicto	El Plan Perla intentó (aunque de forma limitada) abordar algunos problemas estructurales como la pobreza y la marginación
Las campañas de propaganda buscaron consolidar la narrativa oficial en la que el Estado era el único garante de desarrollo y progreso	Las unidades de autodefensa civil (Lazo) y la creación de redes de inteligencia local (Perla) representan enfoques distintos en la relación entre lo militar y la población civil, pero ambos destacaron la militarización como una constante	

Nota: Autoría propia

A modo de cierre, puede decirse que el discurso estatal y militar desarrollado a través de los planes Lazo y Perla consolidó una narrativa que subordinó el desarrollo social a los imperativos de la seguridad nacional y la contrainsurgencia. Si bien estas estrategias lograron cierto control territorial y debilitaron la insurgencia en algunos frentes, también perpetuaron dinámicas de exclusión y desconfianza hacia el Estado.

Evaluación de las iniciativas dirigidas a alienar a las comunidades del pensamiento comunista y alinearlas con el gobierno

Las iniciativas estatales y militares en Colombia, plasmadas en el Plan de Operaciones Lazo (1962) y el Plan Perla (1968), buscaban alienar a las comunidades rurales del pensamiento comunista mediante una combinación de acciones cívico-militares, propaganda y represión. Estas estrategias, influenciadas por la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos, integraron el desarrollo social como una herramienta clave para consolidar el control del Estado en las zonas rurales y contrarrestar la ideología insurgente, aunque a menudo enfrentaron tensiones y contradicciones en su implementación.

El Plan de Operaciones Lazo se implementó como respuesta a los desafíos iniciales de las guerrillas en Colombia y a las secuelas del conflicto político. A través de acciones cívico-militares, se promovieron programas de alfabetización, construcción de escuelas y caminos, y provisión de servicios médicos, con el fin de generar lealtad hacia el Estado y desvincular a las comunidades de la influencia subversiva (Ejército Nacional,

1962). Aunque estas iniciativas sugerían un propósito de desarrollo, en realidad estaban subordinadas a los objetivos militares, como la neutralización de núcleos insurgentes y el fortalecimiento del control territorial. Además, el plan incluyó la formación de unidades de autodefensa civil, presentadas como una oportunidad para que las comunidades participaran en su propia protección, pero que en la práctica reflejaron una estrategia de militarización social y vigilancia interna. Estas acciones, acompañadas de campañas psicológicas, reforzaron un discurso que vinculaba la pobreza y la falta de desarrollo con una supuesta apertura al comunismo, lo que justificaba la intervención militar como garante del progreso.

Por su parte, el Plan Perla representó una evolución de estas estrategias, integrando de manera más explícita la dimensión social en los esfuerzos contrainsurgentes. Este plan reconoció la necesidad de abordar las causas estructurales de la insurgencia, como la pobreza y la desigualdad, y amplió las iniciativas de desarrollo social mediante la asignación de recursos para infraestructura básica, formalización de tierras y educación (Ministerio de Defensa Nacional, 1968). Sin embargo, al igual que en el Plan Lazo, este desarrollo estuvo condicionado por los objetivos militares. La narrativa oficial del Plan Perla insistía en que el progreso social no era un fin en sí mismo, sino un medio para separar a la población de las guerrillas y promover su alineación con las instituciones del Estado.

Ambos planes compartieron una estrategia discursiva que presentaba a las fuerzas armadas como agentes de progreso y estabilidad, mientras atribuían a las guerrillas la responsabilidad de perpetuar el atraso y la violencia. Este discurso fue reforzado por

campañas propagandísticas que buscaban desacreditar las propuestas revolucionarias y asociaban el comunismo con el caos y la subversión. Las acciones cívico-militares se diseñaron para demostrar la capacidad del Estado de responder a las necesidades básicas de las comunidades, socavando así la legitimidad de las guerrillas como alternativa política. Además, el adoctrinamiento de la población estuvo acompañado de medidas coercitivas, como el control de movimientos y la vigilancia estrecha, que generaron tensiones entre las comunidades y las autoridades estatales.

Si bien estas iniciativas lograron algunos avances en términos de control territorial y provisión de servicios, su implementación fue limitada por problemas estructurales, como insuficiencia de recursos y coordinación interinstitucional. En muchos casos, las comunidades percibieron estas acciones como una extensión de la intervención militar más que como auténticos esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida. Así, tanto el Plan Lazo como el Plan Perla evidenciaron una falta de apoyo al compromiso con un desarrollo integral y sostenible, priorizando en su lugar la consolidación del poder del Estado y el debilitamiento de la insurgencia.

En conclusión, ambas iniciativas representaron un enfoque instrumental del desarrollo social subordinado a los objetivos militares, y aunque lograron cierta eficacia en su propósito de contrainsurgencia, sus limitaciones estructurales y su dependencia de un discurso militarista obstaculizaron su capacidad para generar un impacto duradero en las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Impacto en la confianza hacia las instituciones: Análisis de cómo estas estrategias afectaron la percepción de la población sobre las fuerzas armadas y el Estado, incluyendo tensiones y desconfianzas persistentes. Las estrategias implementadas a través del Plan de Operaciones Lazo (1962) y el Plan Perla (1968) tuvieron un impacto complejo y ambivalente en la confianza de la población hacia las instituciones, particularmente hacia las fuerzas armadas y el Estado. Aunque ambos planes buscaron consolidar la presencia estatal y ganar el respaldo de las comunidades más vulnerables, las tensiones derivadas de su enfoque militarizado y la percepción de las comunidades sobre las acciones implementadas generaron un legado de desconfianza persistente, especialmente en zonas rurales.

El Plan de Operaciones Lazo, que surgió como una respuesta urgente al auge de la violencia rural y la insurgencia, estaba basado en un enfoque contrainsurgente que priorizaba la coordinación entre acciones militares y cívico-militares. Uno de sus objetivos clave era reconstruir el tejido social en zonas afectadas por la violencia, mediante la provisión de servicios básicos, educación y trabajo comunitario, mientras se erradicaban las amenazas de las cuadrillas de bandoleros (Ejército Nacional, 1962). Estas acciones cívico-militares, aunque concebidas como un esfuerzo por generar legitimidad estatal, dentro de las dinámicas del estado de sitio, estuvieron marcadas por acciones coercitivas, como la organización de unidades de autodefensa civil, el control a la movilidad de los residentes y el establecimiento de medidas de vigilancia intensa sobre la población, incluso llegando a consejos de guerra verbales contra civiles. Para muchas comunidades, la presencia militar fue vista como una extensión de la represión en lugar de

un intento de mejorar sus condiciones de vida, lo que debilitó la confianza hacia las fuerzas armadas, tal y como puede establecerse por lo dicho por Leal (2002), quien manifiesta lo siguiente:

El uso indiscriminado del estado de sitio se generalizó a mediados de los años sesenta, cuando comenzó a utilizarse más para reprimir los movimientos populares que para combatir la violencia armada [...] Incluía entre las competencias de la justicia penal militar delitos contra el Estado cometidos por civiles y desarrollaba lo concerniente a los consejos verbales de guerra. (p. 48)

Desde el punto de vista discursivo, el Plan Lazo promovió una narrativa en la que las fuerzas armadas eran presentadas como agentes del orden y del progreso, mientras que la insurgencia y cualquier forma de oposición política eran asociadas con el caos y el comunismo. Sin embargo, esta propaganda no logró reconciliar completamente a la población rural con el Estado. Las tensiones surgían, en muchos casos, debido al doble rol de las fuerzas armadas como proveedores de asistencia y agentes de represión. Se requería de una confianza que en varios escenarios no llegó a consolidarse, y las comunidades afectadas quedaban atrapadas entre la violencia insurgente y la intervención estatal.

El Plan Perla amplió y profundizó las acciones cívico-militares, introduciendo programas más ambiciosos de desarrollo económico y social, como la formalización de tierras, el acceso a servicios de salud y la mejora de infraestructuras básicas (Ministerio de Defensa Nacional, 1968). Sin embargo, aunque el discurso oficial del Plan Perla resaltaba

la importancia de abordar las causas estructurales de la subversión, en la práctica su implementación continuaba subordinada a los objetivos prioritarios de seguridad nacional. Las alianzas entre las comunidades y el Estado seguían condicionadas al control territorial y a la vigilancia de la población como estrategia para neutralizar las guerrillas. Este enfoque alimentó la percepción de que las medidas gubernamentales eran, en su mayoría, de naturaleza táctica y no representaban un compromiso genuino con el bienestar de las comunidades.

En regiones donde la insurgencia tenía una fuerte presencia o apoyo social tácito, las acciones de los Planes Lazo y Perla exacerbaban la desconfianza hacia las instituciones. Las prácticas estigmatizadoras, como la identificación de "enemigos internos" entre las comunidades locales, se sumaron a los desplazamientos forzados y restricciones que las fuerzas armadas aplicaron en ciertas áreas, contribuyendo a una percepción negativa del Estado (Bonilla y Villada, 2020). Al mismo tiempo, en zonas donde las intervenciones lograron mejorar las condiciones materiales de vida, surgieron apoyos parciales, aunque estos no se tradujeron necesariamente en una confianza duradera hacia las instituciones estatales. Según Bonilla y Villada (2020), la instrumentalización de estas intervenciones como parte de una estrategia contrainsurgente alimentó una percepción de condicionalidad en las acciones gubernamentales, es decir, las comunidades entendían que el acceso a ciertos beneficios dependía de su alineación con los intereses militares y del Estado. Este condicionamiento generó un apoyo pragmático por parte de algunas comunidades, más que un verdadero sentido de pertenencia o confianza en las instituciones estatales.

Además, el carácter militarizado de estas intervenciones limitó su capacidad para consolidar una relación genuina entre el Estado y la población. Las mejoras materiales, aunque significativas en términos de infraestructura, salud o educación, no lograron sustituir el sentimiento de alienación política y social causado por años de exclusión y estigmatización. En algunos casos, estos proyectos fueron percibidos como medidas temporales diseñadas más para justificar la ocupación militar del territorio que para atender de manera sostenida las necesidades de las comunidades.

Conclusiones

Tras el análisis hermenéutico de las relaciones cívico-militares en Colombia durante la década de 1960, se identificaron importantes hallazgos relacionados con los objetivos planteados.

Objetivo Específico 1: Caracterizar la estrategia contrainsurgente adoptada en Colombia durante el periodo de estudio, resaltando la influencia de la doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la construcción del concepto de "enemigo interno" asociado al comunismo.

Las estrategias contrainsurgentes implementadas en Colombia, representadas principalmente por el Plan Lazo (1962) y el Plan Perla (1968), reflejaron un profundo alineamiento con la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Estas iniciativas no solo definieron un enfoque militarizado para combatir las insurgencias, sino que también consolidaron la creación del concepto de "enemigo interno", donde las guerrillas, los movimientos campesinos y sectores de

oposición política terminaron siendo etiquetados como una amenaza directa al orden estatal.

El Plan Lazo estuvo centrado en la eliminación de los focos de insurgencia mediante acciones represivas combinadas con programas cívico-militares que buscaban alienar a las comunidades de las guerrillas. Esta estrategia enfatizó la militarización del control social, priorizando objetivos de seguridad sobre la resolución de las causas estructurales del conflicto, como la pobreza o la desigualdad. En contraste, el Plan Perla incorporó un enfoque más integral al reconocer la necesidad de abordar estas causas a través de acciones de desarrollo, como la formalización de tierras, mejora de infraestructuras y acceso a servicios básicos. Sin embargo, ambos planes compartieron el rasgo común de subordinar los objetivos sociales a las prioridades militares.

En esencia, el análisis muestra que el marco discursivo adoptado por ambas estrategias institucionalizó la lógica del anticomunismo como eje rector en las políticas de seguridad y defensa nacional, afectando profundamente la forma en que el Estado colombiano abordó las dinámicas del conflicto armado.

Objetivo Específico 2: Evaluar críticamente el rol de las relaciones cívico-militares como un mecanismo de control social dirigido a ganar el apoyo de la población civil hacia las instituciones estatales y alejarlas del pensamiento y movimiento comunista.

Las relaciones cívico-militares durante este periodo se configuraron como un mecanismo de control social diseñado para ganar legitimidad entre la población civil. A través de las acciones cívico-militares (ACM) organizadas bajo los planes Lazo y Perla, el Estado intentó consolidar su presencia en territorios rurales históricamente marginados,

ofreciendo beneficios como jornadas de atención médica, construcción de infraestructura y programas educativos. Sin embargo, estas iniciativas estuvieron profundamente marcadas por objetivos de alineación ideológica, lo que las convirtió en una extensión de las estrategias de contrainsurgencia.

El discurso estatal y militar enfatizó que las fuerzas armadas no solo cumplían un rol de defensa, sino que también eran garantes del progreso y la estabilidad. Esta narrativa, reforzada con campañas de propaganda, intentaba alejar a las comunidades rurales del pensamiento comunista y legitimar la intervención militar en aspectos de la vida civil. No obstante, en muchos casos, estas acciones fueron percibidas como coercitivas y represivas, generando tensiones entre las comunidades y las autoridades estatales. Estas tensiones exacerbaron problemas de desconfianza hacia el Estado, especialmente cuando las medidas de control se tornaron autoritarias o cuando la militarización de las zonas rurales perpetuó dinámicas de exclusión social.

A pesar de ciertos avances en términos de control territorial y provisión de servicios, el resultado final fue ambivalente, pues mientras se pretendía ganar “los corazones y mentes” de las comunidades, estas estrategias contribuyeron a la percepción de las fuerzas armadas como instrumentos de represión más que de protección.

De este modo, el análisis de las relaciones cívico-militares en Colombia durante este periodo evidencia cómo las estrategias diseñadas bajo el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional priorizaron la seguridad estatal sobre las necesidades sociales y estructurales de las comunidades. Al caracterizar las estrategias contrainsurgentes y

evaluar su impacto en el tejido social, se destaca que, aunque lograron ciertos avances en la lucha contra la insurgencia, perpetuaron dinámicas de desconfianza y exclusión.

El legado de estas políticas subraya la importancia de construir una relación equilibrada entre las fuerzas armadas, el Estado y la sociedad, que no dependa exclusivamente de objetivos militares, sino que priorice también la atención a las causas estructurales del conflicto y el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Referencias

- Azcue, C. (2003). *Nuevo espacio para las relaciones cívico militares en la República Argentina*. Cuadernos de estrategia, (123), 219-261.
- Bonilla-Ovallos, M. y Villada-Gómez, A. (2020). *Los batallones de Acción Integral y la construcción de paz en Colombia*. Logos Ciencia & Tecnología, 12(2), 70-83.
<https://doi.org/10.22335/rlct.v12i2.1125>
- Buitrago, F. (1970). *Política e intervención militar en Colombia*. Revista Mexicana de Sociología, 32(3), 491–538. <https://doi.org/10.2307/3539217>
- Castro, D. (2016, febrero). Modernización contrainsurgente: la Acción Cívico Militar en Colombia y sus fuentes intelectuales (1958-1971) [Tesis de pregrado]. Universidad de Antioquia, Medellín.
- Cimadevilla, J. (2020). *Desarrollando país: las acciones cívico-militares por parte de las Fuerzas Militares de Colombia 1962-1978*. Ciudad Paz-ando, 13(2), 104–115.
<https://doi.org/10.14483/2422278X.17180>
- Comisión de la verdad. (s.f.). *El Plan Lazo y la acción cívico-militar. Estado colombiano*
<https://www.comisiondelaverdad.co/el-plan-lazo-y-la-accion-civico-militar>
- de Arce, A. (2003). *Colombia. Las relaciones entre la sociedad civil y militar: Hacia un entendimiento necesario*. Cuadernos de estrategia, (123), 21-56.
- Dufort, P. (2013). *Las políticas desarrollistas de Alberto Ruiz Novoa a principios de 1960: ¿Se podría haber evitado medio siglo de guerra?* Estudios en seguridad y defensa, 8(16), 31-46.
- Ejército Nacional. (1962). *Plan de Operaciones Lazo*. Comando Ejército, Bogotá D.C.

- Eastman, J. (2001). *Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia*. Sánchez, G. (Eds.), Planeta Colombiana Editorial, Historia Crítica, 1(22), 163-165.
<https://doi.org/10.7440/histcrit22.2001.08>
- Fazio, H. (2010). *Historia del tiempo presente: Una historia en construcción*. Historia Crítica, (41), 154–173. <https://doi.org/10.7440/histcrit41.2010.07>
- Fuerzas Militares (2017). MANUAL FF.MM 5-1 ACCIÓN INTEGRAL CONJUNTA. Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares.
- González, D. (2015). Políticas de desarrollo en el marco de las estrategias contrainsurgentes implementadas en Colombia (1962-2015) [Tesis de maestría]. Universidad de los Andes, Bogotá D.C.
- González, F. (2014). Poder y violencia en Colombia. Odecofi- Cinep.
- Guzmán, G., Borda, O., y Luna, E. (2019). *La violencia en Colombia Estudio de un proceso social Tomo II*. Ediciones Tercer Mundo.
- Huntington, S. (1957). *El soldado y el Estado*. Harvard University Press, Cambridge.
- Lair, E. (2000). *Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia*. Análisis Político, (41), 126–130.
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/80118>
- Leal, F. (2002). *La seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría*. Alfaomega Grupo Editor. CDMX, Mexico.
- Mansilla, A. (2016). *Las relaciones civiles-militares en Colombia: el encuentro con la sociedad*. Revista de las Fuerzas Armadas, (237-238), 50-59.
- Marín, L. y Figueroa E. (2024). *Plan Lazo: cara estratégica del Ejército Nacional de Colombia, 1962-1964*. En L. D. Naranjo Colorado & A. Yate Arévalo (Eds.), Impactos del Ejército

- Nacional de Colombia. Estrategias sociales, políticas y militares (pp. 57-81). Sello Editorial ESMIC. <https://doi.org/10.21830/9786289640229.03>
- Marín, L., y Figueroa, E. (2024). Plan Lazo: cara estratégica del Ejército Nacional de Colombia, 1962-1964. En Naranjo, L. y Yate, A. (Eds.), *Impactos del Ejército Nacional de Colombia: Estrategias sociales, políticas y militares*. Sello Editorial ESMIC. 57-81. <https://doi.org/10.21830/9786289640229.03>
- Ministerio de Defensa Nacional. (1968). *Plan Perla 1968*. Fuerzas Militares de Colombia.
- Nieva, J. (2003). *Fuerzas Armadas y sociedad: El caso de Chile*. Cuadernos de estrategia, (123), 87-125.
- Palacios, M. (2003). *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994*. Editorial Norma.
- Pécaut, D. (2012). *Orden y violencia: Colombia 1930-1953*. Universidad Eafit.
- Pedraza, Z. (2009). *El debate eugenésico: Una visión de la modernidad en Colombia*. Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes, Bogotá D.C.
- Rivas, A. (2025). Normas APA: *La guía definitiva para presentar trabajos escritos*. *Guía Normas APA*. Recuperado 16 de marzo de 2025 en: <https://normasapa.in/>
- Rueda, R. (2000). *De la Guardia de Fronteras a la Contrainsurgencia: elementos de la evolución política e institucional del ejército colombiano 1958-1965*. Icfes, Bogotá D.C.
- Sánchez, G., y Peñaranda, R. (Comps.). (1991). *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. CEREC.
- Sánchez, G. (2000). *Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia*. Bogotá: Planeta.
- Ugarriza, J. y Pabón, N. (2017). *Militares y guerrillas: La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016*. Universidad del Rosario, Bogotá D.C.

Von Clausewitz, C., y Naville, P. (1977). *De la Guerra*. Diógenes.